

ECONOMIA POLITICA DEL PLAN COLOMBIA

Por: Jesús Martínez Betancourt/*

“La superestructura extraeconómica que se levanta sobre la base del capital financiero, la política y la ideología de éste, refuerza la tendencia a las conquistas coloniales”.

(V.I. Lenin)

1. El Plan Colombia, una política imperialista.

El verdadero plan de desarrollo de Colombia no es el que aprobó el Congreso de la República en octubre del año pasado, sino el que se deriva de los acuerdos sobre créditos y “ayudas” del Gobierno del Dr. Pastrana con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Interamericano de Desarrollo y especialmente con el Gobierno de los Estados Unidos, ya conocido como Plan Colombia.

Una de las características del imperialismo, formuladas por V. I. Lenin en su libro “El imperialismo fase superior del capitalismo”, de vigencia en este mundo globalizado por la hegemonía ultraimperialista, es que simultáneamente con el reparto económico del mundo se hace el reparto territorial, para afianzar el dominio económico, cultural y político. El reparto territorial fundamentado en las pretensiones económicas, por las fuentes de materias primas y alimentos y/o por mercados para vender los productos de las metrópolis, generalmente se ha hecho por la vía bélica, como las dos guerras mundiales del siglo XX, o las regionales, como la del Golfo Pérsico, entre otras.

Las guerras además, bajo cualquier pretexto, son el incentivo para mantener una economía militar anclada en los países desarrollados, que deja más ganancias que cualquier otra industria, equiparable únicamente con la del narcotráfico. El capitalismo de por sí no sólo es salvaje, sino, especialmente violento. La globalización es un estadio más en el desarrollo del capitalismo, es la fase ultraimperialista, la cual antes que resolver las contradicciones entre el carácter social de producción y la forma privada de apropiación, las agudiza, bajo nuevas condiciones de desarrollo financiero, técnico, tecnológico, científico e informativo, al interior de cada país y a nivel mundial, profundizando así las diferencias entre naciones ricas y pobres.

En este contexto inicial y después de una lectura minuciosa, “con lupa” como lo recomienda El Espectador, propiedad del Grupo Santodomingo, cuando publica un resumen del Plan Colombia, se puede inferir fácilmente que el Plan Colombia ante todo es un plan de guerra, que nos toca de cerca a los nariñenses, pues define como **objetivo No 1** “Combatir el cultivo ilícito mediante la acción continua y sistemática del ejército y la policía, especialmente en la región del Putumayo y en el sur del País”. Más aún, en el **objetivo No. 2** se busca “Establecer control militar sobre el sur del país con propósitos de erradicación”. Bajo el título de Focos de Integración del Plan, se dice: “**Fase 1. Esfuerzo judicial, policial y militar de rango bajo apuntando al Putumayo y al Sur. Planeado por un año**”(1). Según informes de prensa, las fumigaciones intensivas en el Putumayo ya comenzaron, a pesar de la oposición de las autoridades ambientales de la zona.

Contrariamente a los objetivos puntuales, como el destacado anteriormente, el Plan Colombia define parte de un conjunto de objetivos, metas, recursos y medidas, que se pretenden adoptar en Colombia, tendientes a “promover el desarrollo económico sostenible y el aumento del empleo, una inflación más baja, consolidar el progreso hacia la viabilidad externa y la reducción de la pobreza” (2), para cuyo propósito, según los defensores del Plan, se debe “construir un Estado de justicia social que proteja a todos los ciudadanos y mantenga vigente sus derechos a la vida, la dignidad y la propiedad, la libertad de creencia, opinión y de prensa”. (3). El paquete de medidas del Plan tiene un monto total de 7.500 millones de dólares, de los cuales Colombia se compromete a aportar de sus recursos propios y como contraprestación la suma de 4.000 millones de dólares, que hasta ahora el gobierno no ha dicho de dónde los va a obtener, pues de los ingresos tributarios se aspira financiar solo el 40% del presupuesto para el 2.000, que en un 60% están asignados para gastos de funcionamiento, 30% para el pago del servicio de la deuda y solo el 10% para inversión. Los 3.500 millones de dólares restantes se están tramitando en forma de “ayudas” y créditos concedidos por la Banca Internacional, repartidos así: 700 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Latinoamericano de Reservas entre otros; el saldo de 2.800 millones será otorgado por el Fondo Monetario Internacional.

Inicialmente se había pensado destinar el crédito del FMI a fines tales como combatir el narcotráfico, con 1.800 millones de dólares, 230 millones para desarrollo alternativo, 138 millones para el plan ecológico, 115 millones para la atención a desplazados, 100 millones para construir cárceles, 46 millones para combatir el contrabando y evasión y 30 millones para rubros de cooperación en el proceso de paz, fortalecimiento de la justicia, sociedad civil y gobiernos locales etc. (4). Pero a raíz de la “buena voluntad” manifestada por el gobierno americano, se está gestionando una “ayuda” por la suma de 1.600 millones de dólares que han bajado a 1.270 millones, que constituyen una porción del Plan Colombia, de los cuales el Director de Planeación Nacional ha reconocido públicamente que mil millones se destinarán a la lucha frontal contra el narcotráfico y el resto para cubrir los gastos que implican los desplazamientos y algo de sustitución de cultivos ilícitos, etc. Por eso los recursos del Crédito FMI han sido redireccionados para otros fines y no exclusivamente para

combatir el narcotráfico, como se observa en el Acuerdo Extendido de Colombia con el FMI, firmado el 3 de diciembre de 1999 (5).

2. Presencia del capital extranjero en Colombia

La “ayuda”, dentro de la cual se enmarca el Plan Colombia, es una de las tres formas con las cuales hace presencia el capital extranjero en muchos países del mundo; las otras dos son la inversión directa y el crédito externo. Los intereses económicos de dichas formas están íntimamente ligados, pues si no hay “ayuda” para pacificar al país y eliminar la competencia, no hay condiciones, seguridad, ni garantías para invertir y prestar capital.

2.1. La inversión directa

Tiene que ver con el montaje o compra directa de empresas en Colombia por parte de entidades de otros países. En 1997 esta forma de presencia del capital extranjero en el país fue de 5.400 millones de dólares, es decir, el 5% del PIB, aumentando en 1999 al 6%. El incremento de la inversión extranjera trae como consecuencia la mayor entrega al capital extranjero de los recursos naturales, de las empresas estatales, así como la creación de nuevas empresas. Estados Unidos participa con el 50% de la inversión extranjera directa en Colombia, seguidos de la Unión Europea con el 25% y el resto se lo reparten otros países de Latinoamérica y Asia. Los sectores en los cuales tiene mayor presencia la inversión extranjera son: Manufacturero, Financiero, Seguros, Servicios Públicos, Minería, Transporte y Comunicaciones; el otrora rentable campo colombiano que abastecía de materias primas y alimentos a la metrópoli, ha sido abandonado por el capital extranjero. La mitad de las mercancías de origen industrial de Colombia se produce con la participación de dicho capital, lo cual agudiza el grado de dependencia económica y otras que de ella se derivan. Pero en un balance global de los 10 años de apertura neoliberal, el capital extranjero ha contribuido significativamente a la terciarización de la economía.

2.2. El crédito internacional.

Esta modalidad de presencia del capital extranjero se conoce comúnmente como la deuda externa, consecuencia del endeudamiento que contrae cada país con la Banca Internacional para cubrir sus déficits internos, o para comprar mercancías y servicios en los mismos países prestamistas. Esta tiene dos componentes, la deuda pública, es decir, la que adquiere el Estado, y la deuda privada, o sea la que adquieren los particulares con la banca internacional. En 1970 la deuda externa total de Colombia fue de 1.776 millones de dólares, de los cuales 1.319 correspondían a deuda pública (74.5%) y 457 a deuda privada (25.75%). Para 1999 la deuda total era de 33.857 millones de dólares repartidos así: la pública de 18 mil millones (54%) y la privada de 15 mil millones (46%). Para el año 2.000, de los 46.6 billones de pesos del presupuesto nacional ya se tiene destinado para el pago del servicio de la deuda (amortización de capital y pago de intereses) la suma de 15.6 billones de pesos, es decir, el

33% del presupuesto nacional. (El Ecuador destina el 51% de su presupuesto al servicio de la deuda).

El pago del servicio de la deuda externa es oneroso para el país que ya ha pagado varias veces la deuda inicial. Así por ejemplo, mientras que en 1990 la deuda externa colombiana fue de 17.193 millones de dólares, para 1997 era de 31.440, pero entre 1990 y 1997 el país pagó 31.433 millones de dólares, es decir, el doble de la deuda inicial de 1990 y 15 veces la de 1970. O mejor, se ha pagado como en toda la América Latina con 9 años de sus exportaciones. A esta modalidad de exportación de capitales, Lenín la denomina “parasitismo al cuadrado”, porque es usuraria y especulativa, en el país de origen y en el país de destino.

La significativa descarga económica con destino al pago de la deuda externa, es una condena para vivir eternamente en el subdesarrollo, pues los pocos excedentes que se generan en el país deben destinarse para tal fin, amén de los requisitos para acceder a los créditos.

En junio del año pasado el FMI avaló algunas de las medidas que ya se estaban aplicando por parte del Gobierno colombiano y otras propuestas por el mismo organismo para cumplir con lo denominadas “reformas estructurales”, como garantía anticipada para poder acceder al crédito que ahora se tramita ante dicha entidad. Tales medidas, entre otras, son: disminución de salarios (sin reconocimiento de la productividad), aumento de impuestos, presupuesto draconiano que afecta la inversión y el funcionamiento del Estado, reducción de los gastos de funcionamiento en municipios y departamentos, los cuales deben empezar a asumir las pensiones de sus trabajadores con el 2% de sus ingresos corrientes (el déficit pensional del Estado es de 200 billones de pesos), reclasificación de municipios, flexibilización en la legislación laboral, control a la evasión de impuestos, ampliación de la base de contribuyentes, lo mismo que de la base tributaria, disminución del impuesto a la renta, lo mismo que a las remesas de las inversiones del capital extranjero, cambio en el régimen de jubilaciones y cesantías, despido de trabajadores sin indemnización, reducción de las cargas parafiscales, variación en la jornada laboral diaria y semanal, venta de empresas estatales como ISA, Isagen, Carbocol y 14 distribuidoras eléctricas más, venta de 40 empresas de acueducto y alcantarillado y de entidades financieras como Granahorrar, BCH, Bancafé y Banco del Estado etc., etc. Es decir, acabar con lo poco que queda del sector estatal, que representa el capital social de todos los colombianos, en favor del sector privado. (6).

2.3. La “ayuda”.

Esta es otra forma de presentarse el capital extranjero en Colombia; es algo así como uno regalo y como tal es un acto de “generosidad”, “buena voluntad” o de “colaboración” que hacen los países desarrollados con los países subdesarrollados, que pasan por algunas calamidades económicas, sociales o políticas, pero especialmente cuando, según el punto de vista de los países del Norte, sienten amenazados sus “intereses nacionales”, que importan más que sus calamidades internas. Colombia ya conoce este tipo de “ayudas” que dependen mucho de la coyuntura política o económica del continente americano. Por ejemplo, la

“ayuda” que se dió en la década de los 60 a los países de América Latina, en el marco de la “Alianza para el Progreso”, la cual legitimaba con recursos y políticas la urgencia de implementar las llamadas “Reformas sociales agrarias”, con el fin de contrarrestar los efectos de la revolución Cubana. Esta ayuda iba desde el regalo de ropa usada y soya hasta dinero para la compra de tierras y armas, para reprimir los movimientos sociales, especialmente de los campesinos latinoamericanos.

Pero, ¿cuáles intereses nacionales de los Estados Unidos están amenazados por Colombia para que vengan en “ayuda” a financiar con 1.600 millones de dólares, (que ya van en 1.270 y pueden bajar más) una parte del Plan a Colombia? ¿Será su interés ético, político, o económico?

2.3.1. El interés ético

Los Estados Unidos presentan una sólida economía expresada en la creación de 29 millones de empleos desde 1980 (neto), un desempleo del 4.3%; un ingreso familiar de 35.492 dólares; una inflación del 1.4%; un superávit fiscal de 39.000 millones de dólares en 1998 y un ahorro per cápita del 3.7 % (10).

En el debate de la Comisión de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el líder de la Comisión Bill Young expresó su apoyo a la “ayuda” para el Plan Colombia bajo el argumento de que se trata de una situación de emergencia que requiere una respuesta inmediata por cuanto, según él, “es esencial eliminar el producto de la droga donde éste se produce. Si no, cada día que pasa vamos a tener más niños que se hacen adictos a las drogas”. Pero se opusieron a una enmienda que pedía se asignara una partida similar a la del Plan Colombia para combatir el consumo dentro de los Estados Unidos. Pues se quiere hacer creer que el problema es de los productores y no de los consumidores. Pero son los parámetros culturales de la sociedad norteamericana los que crean las condiciones para que la demanda de drogas alucinógenas sea tan alta en ese país.

Por eso, paradójicamente y contrario a estos rasgos de progreso americano, están los hechos que evidencian altos niveles de descomposición social, consecuencia dialéctica de su propio desarrollo económico, desde antes de que se empezara a producir y exportar droga desde Colombia. El desarrollo económico de los Estados Unidos, que introduce e impone ciertos parámetros culturales de comportamiento, ha contribuido para que el 16.1% de los jóvenes entre 18 y 25 años consuma drogas; para que el uso de cocaína haya subido del 1.2% de la población en 1997 al 2% en 1998; para que el consumo de drogas entre los estadounidenses de todas las edades se mantenga estable en 13,66 millones, esto es el 5,2% de la población; para que 78 de los 260 millones de estadounidenses hayan probado drogas ilegales en algún momento de su vida (11). El Alcalde de Washington fue sorprendido y filmado en el momento en que consumía cocaína.

El interés ético nacional es una postura hipócrita frente al verdadero interés económico, pues la ética de los gringos puede terminar en el momento en que descubran mediante clonación o

técnicas transgénicas en invernaderos, una variedad de coca que se pueda producir dentro de los Estados Unidos, como ocurrió con la marihuana, que fue inmoral y corruptora mientras se producía en Colombia, pero dejó de serlo, cuando se la empezó a producir en California. Y a juzgar por el desmantelamiento de un laboratorio de procesamiento de cocaína en Málaga España, se puede pensar que se inició el proceso de clonación del alcaloide. Así entonces, todo el proceso de producción, comercialización y consumo de la droga ocurrirá dentro de los Estados Unidos, quedándose el valor agregado, el tributo y los dólares, en ese país y no en otros que les disputan sus intereses económicos. Se rumora que gran cantidad de activos de los bancos americanos están permeados por los dineros del narcotráfico que no han podido controlar.

La doble moral de los americanos se puede observar en la aprobación en la Cámara de Representantes de unas enmiendas y en el rechazo de otras al Plan Colombia; por ejemplo, se aprobó que si hay helicópteros “usados” por las autodefensas ellos serán devueltos a los Estados Unidos y se aprobó también, incluir a los paramilitares en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Pero cabe anotar que las enmiendas solo son recomendaciones, que no son de obligatorio cumplimiento. Y las enmiendas o modificaciones negadas fueron las siguientes: incluir una partida igual a la que se ofrece a Colombia para invertirla en combatir la demanda de narcóticos (sic); se negó la propuesta de que todo el dinero de la “ayuda” se reorientara al desarrollo alternativo; también se negó adicionar 50 millones de dólares para la sustitución de cultivos; se negaron las facultades al comandante de las Fuerzas Militares para destituir a oficiales investigados por violaciones de los derechos humanos; y se negó la propuesta de pasar asuntos de violaciones de derechos humanos, de la justicia militar a la justicia civil (12).

A pesar de los esfuerzos de Colombia para reducir plantaciones de coca, según el jefe de Planeación Nacional, y por efectos de la mayor demanda, hoy en Colombia se produce 8 veces más cocaína que en la época de Pablo Escobar.

2.3.2. El interés político

Desaparecida la amenaza del comunismo, se han inventado el fenómeno del narcotráfico como el otro fantasma que recorre el mundo, para justificar la unipolaridad hegemónica del capitalismo y las posturas imperiales de los EE.UU. La Doctrina Monroe siempre ha considerado a la América Latina como “el patio trasero de los americanos”, por eso y frente a los intentos de la Unión Europea de penetrar los mercados latinoamericanos, recobra mayor vigencia la consigna de “América para los americanos”. Más aún, si Colombia tiene una ubicación geográfica continental y espacial meridional, estratégicas para sus políticas globalizadoras.

Por eso no es gratuito que los Estados Unidos hayan contribuido decididamente a la paz entre el Ecuador y el Perú, pues les permite a ambos países retirar los ejércitos de sus respectivas zonas fronterizas y desplazarlos hacia las fronteras con Colombia, para evitar no solo el desplazamiento de los productores de cocaína, sino también, y con ese pretexto, perseguir a la

guerrilla que opera en los corredores fronterizos. En esta guerra van a entregar como parte de la “ayuda” armas obsoletas, con lo cual se desenhuesa su industria militar.

Para ellos el narcotráfico es un problema de alto Estado, generado por los productores y no por los consumidores, porque amenaza su “moral”, pues ha ido permeando también las altas esferas del poder político y social de todo el mundo; pero en el fondo, el problema sigue siendo eminentemente económico y la política, como se sabe, es la expresión concentrada de la economía, mientras que la guerra es el estadio más agresivo de la política. Según ellos el cartel mundial de las drogas y la llamada narcoguerrilla, no pueden ganarle al cartel de la hegemonía de los Estados Unidos.

En lo político el Plan también es una justificación para la agresión, toda vez que considera a la guerrilla un producto del narcotráfico y no el resultado de las causas objetivas que generan la violencia en Colombia, como es la concentración de la riqueza. Pero en el fondo y para proteger el interés político americano, que compite con el de la Unión Europea y el del Asia, lo que se busca es que haya tranquilidad y garantías para la inversión extranjera en territorio colombiano.

2.3.3. El interés económico

La economía del narcotráfico mueve cada año cerca de 5 billones de dólares en todo el mundo y ocupa el segundo lugar después del negocio de las armas. Mientras un gramo de cocaína cuesta 4 dólares en Bogotá, el mismo gramo cuesta 300 dólares colocado en Moscú. El narcotráfico ocupa el 8% de las tierras cultivables de Colombia y tala 4 mil hectáreas de bosques al año. En 1995 movió cerca de 4 mil millones de dólares en ingresos y dejó 2.6 mil millones de dólares como ingresos netos. Según el Director Nacional de Planeación, en Colombia, en 1996 se produjeron 250 toneladas de cocaína y se mueve una cantidad de dinero equivalente al 56% del PIB, en el Putumayo hay sembradas 50 mil hectáreas de coca, y cada hectárea produce un kilogramo de base de coca que vale \$1.700.000.

El interés económico para impulsar el Plan Colombia por parte de los Estados Unidos está caracterizado por los siguientes aspectos:

Es connatural al capitalismo la competencia desenfrenada por obtener ganancias dentro o fuera de su país; ese es el motivo fundamental de la lucha contra la droga, y no el ético. La lucha es por definir quien se queda con las jugosas ganancias que deja esta economía: los carteles ilegales o los legales.

La comercialización de la droga en los Estados Unidos no tributa, no paga impuestos, como si lo hacen los carteles legales.

La economía del narcotráfico es una economía real, que realiza todo el proceso de reproducción del capital y mueve mucho circulante, que tiene incidencias inflacionarias.

Los Estados Unidos históricamente han producido y recogido dólares internamente y en el mercado mundial, pero ahora hay una economía paralela que está haciendo lo mismo y no está bajo su control.

No hay control impositivo sobre la salida de grandes cantidades de dólares de los Estados Unidos hacia otros países, especialmente hacia bancos de Europa, sus más fuertes competidores. Menos pueden aceptar que el narcotráfico como un nuevo trust o monopolio mundial pueda estar en manos de los países subdesarrollados.

Hay un evidente contrasentido entre la apertura económica, la internacionalización y globalización de la economía, que “abre” las puertas del mundo a la libre circulación de mercancías, especialmente hacia los países subdesarrollados, y la utilización de los mecanismos y facilidades aperturistas para el lavado de dólares producto del narcotráfico. El narcotráfico también se ha globalizado.

3. Las opiniones sobre el Plan Colombia

El debate frente al Plan Colombia en general y a la denominada “ayuda” para la ejecución del mismo está planteado en dos espacios geográficos: los Estados Unidos, con mayor intensidad, y Colombia, con marcada indiferencia; el país está distraído con el Referendo; el 73% de colombianos no sabe qué es el Plan Colombia, pero en ambos casos se pretende ir al fondo del problema, llevando la discusión a la interpretación de las causas objetivas del fenómeno del narcotráfico.

3.1 La defensa del plan

Según la revista Dinero, por primera vez en Colombia hay consenso sobre los tres graves problemas que afronta el país y que le hacen perder “viabilidad” en un mundo globalizado: el conflicto interno armado, la exclusión social y la crisis estructural de la economía. La revista expresa su preocupación porque el Plan Colombia que está en discusión en el Congreso Americano tenga otras intenciones diferentes a las plantadas en la primera versión del Plan de abril de 1999, cuando reconocía que:

“..la violencia en el país posee profundas raíces en la exclusión económica y política y en el ejercicio de una democracia con desigualdad y pobreza y que también se ve dinamizada por la presencia de cultivos ilícitos, la inversión tanto pública como privada debe contribuir a crear las condiciones para construir la paz, a construir y fortalecer la democracia, de cuya debilidad las diferentes manifestaciones de violencia son un síntoma”. (13)

La versión 2000 en inglés del Plan Colombia que no fue divulgada, ni debatida en el país, cambia totalmente el objetivo del plan, al exigirse que: “*No se trata solamente de asumir el reto planteado por las experiencias de nuestra historia y evolución en la creación de un Estado nacional sino también de responder a los dos nuevos retos del crecido tráfico de drogas y del proceso económico, político y cultural de la globalización...*”. (14). “*La lucha contra el tráfico de drogas constituye el meollo de nuestra estrategia*”. (15).

Por lo tanto, dice la revista Dinero, “las desigualdades sociales, los altos niveles de exclusión política y económica, la anacrónica concentración de ingreso y explotación de la tierra, la mala distribución de la propiedad, los bajos salarios y los altos niveles de pobreza, no son tenidos en cuenta ni como causa de los niveles de violencia que padecemos, ni como expectativa de solución”, (16) y concluye que cualquier acción gubernamental, nacional e internacional frente al conflicto colombiano, debe considerar un proceso de negociación política para trascender las propuestas coyunturales que vayan más allá de las negociaciones entre el gobierno y los grupos armados y contribuir a soluciones estructurales de largo plazo, que pasan por la atención a los problemas sociales que alimentan la economía del narcotráfico, como un efecto, más que como una causa. Con esta posición coinciden amplios sectores de la opinión norteamericana, como veremos más adelante.

La lectura integral del Plan Colombia, es decir, de sus tres versiones: la guerrerrista presentada en inglés a los Estados Unidos, la humanitaria presentada en francés a la Unión Europea y la productivista, presentada en español a los colombianos, permite observar otros componentes que van más allá de la “ayuda” de los 1.270 millones de dólares para la guerra, pues considera que hay necesidad de recuperar social y económicamente al país, para combatir al narcotráfico desde una responsabilidad compartida internacionalmente, por eso establece dos estrategias, supuestamente con carácter social como todos los créditos:

- - ***El Fondo de Emergencia Social***, que cuenta con 900 millones de dólares, prestados por el BID para refinanciar empresas afectadas por la crisis económica. Estos recursos ya fueron asignados a 7 ciudades importantes del país, descartándose aquellas regiones en donde es más agudo el atraso y abandono como las de Nariño, o donde se presentan los más altos índices de violencia.
- - La otra parte del Plan Colombia tiene que ver con el ***Plan de Democratización y Desarrollo Social***, por 2.000 millones de dólares, destinado al desarrollo alternativo y por programas de asistencia humanitaria, fortalecimiento de la justicia y otras instituciones en las regiones más apartadas del país.

Para el gobierno el desarrollo alternativo no es la sustitución de cultivos, que el mismo gobierno reconoce como un fracaso, sino que es una propuesta de “*desarrollo regional integral* que genere verdaderas alternativas de ingreso en el mediano y largo plazo que será complementado por inversiones en *infraestructura física y social dirigidas a garantizar la*

competitividad y el acceso a los mercados nacional e internacional". Compartimos esta visión, pero la aplicación práctica dista mucho de ser realidad.

El componente de derechos humanos y atención humanitaria del Plan Colombia busca atender, según ellos, a la población víctima de la violencia, como los desplazados; difundir y promover los *derechos humanos* y eliminar las minas antipersonales. Para los pocos norteamericanos defensores del Plan Colombia, es urgente la "ayuda", para detener el flagelo del narcotráfico, porque está acabando con la juventud de los Estados Unidos, y para quitarle la base material de apoyo a la guerrilla, que está desestabilizando las instituciones en una zona tan estratégica para los intereses nacionales de los EE.UU.

3.2 Las críticas al Plan

El Plan ha recibido más críticas que apoyo en los Estados Unidos y tímidamente en Colombia. Los estadounidenses están divididos en cuatro bloques: los que consideran que el problema de Colombia radica en el desarrollo social; los que dicen que está en el narcotráfico y por ende en la guerrilla; los terceros, que reconocen que el problema está en la demanda de drogas y por tanto se debe invertir en E.U. y no en Colombia, y los cuartos, que ven en la "ayuda" el fortalecimiento de las violaciones a los derechos humanos.

3.2.1.No hay compromiso de los colombianos. "No queremos otro Vietnam", dicen muchos Norteamericanos

El grueso de la crítica es en el sentido de que en Colombia a la sociedad civil, al Gobierno, al Congreso y a las Fuerzas Armadas no solo les falta voluntad para enfrentar la crisis, sino también poner el pecho antes que la espalda, según Sergio Gómez Maseri, corresponsal de El Tiempo en Washington. David Obey, líder demócrata de la Comisión de apropiaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos reconoce que ellos están gastando mucho dinero en una variedad de campañas en el mundo, sin obtener el éxito deseado en el tiempo previsto, afirmando que "igual nos ocurrió en Vietnam, e igual nos puede ocurrir en Colombia". (17).

Obey cuestiona la falta de compromiso de la sociedad colombiana con el Plan Colombia, por eso infiere que los "Estados Unidos no pueden lograr lo que busca sin el compromiso de la elite social y económica de Colombia", porque el compromiso es de por los menos seis años si se quiere lograr resultados significativos.

En ese mismo sentido se pronunció la representante de California Nancy Pelosi cuando dijo: "me gustaría ver la plata que se suponía iban a poner los colombianos, - se refiere a los 4.000 millones de dólares de contraprestación- porque a mí lo que me parece es que los oligarcas y las élites en ese país no han llegado a la decisión de que ellos, también, tienen que poner su

cuota para resolver sus problemas". "No veo a la sociedad colombiana comprometida en esto. Y tampoco veo cómo la plata de nuestros impuestos va a ayudar, si ustedes no se quieren ayudar" (18)

El asesor de Clinton para América Latina, Arturo Valenzuela, ha insinuado que: " ... en el fondo hay un problema social, de desigualdades, y todos tienen que poner de su parte para corregir la situación". (19).

3.2.2 Los militares Norteamericanos en contra del Plan

La crítica más dura contra el Plan Colombia proviene del flanco militar, de parte del teniente coronel retirado Ralph Peters, quien dio unas declaraciones a The Washington Post, publicadas bajo el título de "Estados Unidos prepara su propia trampa", en donde afirma que los 1.600 millones de dólares que se tramitan en el Congreso son un sustituto de la estrategia, pues sólo es enviar un cheque y cruzar los dedos. Para el Coronel Peters la entrega como parte de la "ayuda" de 30 helicópteros Black-Hawk y 33 Hueys, es como tratar el cáncer con una crema de untar, porque los equipos pueden dar una ventaja local pero no pueden producir resultados estratégicos. "Podemos mantener vivo el régimen de Bogotá, pero no podemos asegurarle la victoria", por eso afirma que "...cualquier expansión de la participación militar de Estados Unidos en la ayuda de un régimen corrupto y feudal sería una locura" (20). Pero cualquier ayuda se podría dar si se van a dar resultados, siempre y cuando se asegure "que la ayuda no será robada o usada indebidamente"; por eso pregunta y responde:

"¿El Gobierno de Colombia (irresponsable, corrupto e inconstante) merece que lo ayudemos a sobrevivir? ¿Es ese Gobierno el medio para solucionar el problema o hace parte intrínseca del problema? "El actual Gobierno de Bogotá carece de cualquier peso moral más allá de débil mandato. Su 'democracia' es poco más que una herramienta de los ricos y los poderosos. Colombia necesita un nuevo comienzo, no prolongar su agonía". (21) El Coronel Peters se burla del compromiso de los colombianos que pasean por Madrid o Miami, mientras los menos favorecidos por el sistema son los que mueren. Recoge la lección de Vietnam, según la cual no importa la cantidad de dinero o americanos dispuestos a servir, porque allí no existió, como ahora en Colombia, un gobierno capaz de salvarse.

Para el Coronel Peters la diferencia entre Vietnam y Colombia radica en el interés estratégico e inmediato para los E.U. de esta última, localizada en medio de los conflictos de Venezuela, Panamá, Centroamérica y México. Las drogas que se producen o pasan por Colombia han herido más a los americanos que la guerra de Vietnam, pero el petróleo de Venezuela y Colombia es crucial para el sistema económico americano. Sin embargo, nada de esto justifica la pérdida de una sola vida estadounidense para apoyar al gobierno de Pastrana, dice el coronel Peters, quien continúa: "Nosotros bien podríamos terminar luchando en Colombia algún día por intereses genuinos. Pero si lo hacemos, debe ser como miembros de una coalición y en apoyo de un nuevo régimen que lo merezca y con un claro y decisivo propósito, construido alrededor de colombianos que tengan el valor y el sentido moral de la

decencia; una nueva Constitución que haga más que preservar los derechos de la oligarquía.”(22).

Por su parte Gabriel Marccela, de la Escuela de Guerra de E.U., después de recomendar a los militares volverse más proactivos, dice que a Colombia no le hacen falta recursos sino liderazgo y que “los ricos no pagan impuestos, no prestan servicio militar y esperan a que los pobres sean los que mueran. La sociedad en su totalidad tiene que estar interesada en sacar el país adelante. Cuando los que tienen el poder y el dinero se van del país, se vuelve, además, más difícil defender la ayuda que se estudia en el Congreso”.

Según el ex jefe del Comando Sur, general Fred Woerner, cuando los estadounidenses ven que en Colombia impera el dinero del narcotráfico y la impunidad, que el conflicto ya lleva 40 años, sin que haya sido resuelto, y que el capital está saliendo en vez de estar invirtiéndose en el país, se preguntan por qué deben aportar dinero de sus impuestos cuando el de los colombianos está escapando.

3.2.3. La prensa norteamericana también se opone al Plan

El editorial del *New York Times* dijo que "El plan no refleja ni una estrategia realista para combatir las drogas ilegales ni un enfoque efectivo a largo plazo para conseguir paz y estabilidad. *Más bien plantea el riesgo de arrastrar a los Estados Unidos a una costosa guerra de contrainsurgencia*". (23). Y agrega: "*Este plan se inclina de manera abrumadora hacia una solución militar para un problema que se ha resistido durante años a las soluciones militares*" (24). *La revista Time* critica al Plan Colombia porque se propone comprar 30 helicópteros Huey que pelearon (y perdieron) en Vietnam y que ahora vuelven a la guerra, estas armas, o mejor armatostes ya estuvieron en Colombia en 1997 y volaron menos de diez horas antes de que los pararan por fallas. *A las ocho semanas de llegar sólo dos seguían funcionando*. De manera concluyente, *The Economist*, que dedica su última portada al problema colombiano, dice: "*Esta guerra no se gana con helicópteros*". Y observa que, *antes que armas, se requiere instituciones democráticas más sólidas y justicia segura para todos*.(25)

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Trent Lott, considera que esta ayuda es muy costosa y fuera de tiempo. Se cree que si es aprobada en el Senado será con recortes significativos, pues en lugar de “ayudar” con los helicópteros Black Hawk se prefiere los Huey que son 10 veces más baratos. De no aprobarse en el Senado se quedaría para el año fiscal 2001 que comienza el primero de octubre. Al menos hasta ahora la “ayuda” está frenada en el Senado.

El año pasado esa ayuda no pasó en el presupuesto gringo y la sola demora generaría desconfianza, como los destacan en el *Task Force independiente*, lo cual fortalecería la posición de las FARC en las negociaciones, porque de lo que se trata es de “ablandarlas”

militarmente. Igual efecto causaría en la "mesa de donantes" que se reunirá en julio en Madrid.

Para Daniel Samper Pizano, columnista de El Tiempo, esta guerra que se propone tiene las siguientes características:

1) Es un *retroceso en la política norteamericana de lucha contra la droga, que renuncia a controlar el consumo* o estudiar fórmulas más imaginativas (despenalizar) y vuelve a la receta inútil de ahogar al productor.

2) *Provocará nefastas consecuencias sociales y económicas. Aumentará la violación de los derechos humanos; cerca de 600 mil personas abandonarán el campo y unirán su drama a los 2 millones de desplazados colombianos.*

3) *Se producirá grave destrucción del medio ambiente.* El Gobierno se comprometió a envenenar desde el aire la mitad del área cultivada, lo que no sólo arruinará los cocales sino todo lo que crece a su alrededor. Dicen los datos que la fumigación de glifosatos ha secado en la Sierra Nevada un tercio de los ríos del macizo y devastado la fauna y la flora del área (26). La fumigación y la guerra no establecen diferencias, menos si esta última no tiene nada de honorable.

Daniel Samper afirma que *el Plan Colombia es una propuesta de guerra para zanjar un problema que sólo se remedia de verdad con soluciones sociales, económicas y de paz.* ¿Acaso los colombianos ya nos acostumbramos a convivir indiferentes con el problema del narcotráfico que ya forma parte de nuestra cultura y por lo tanto es mejor legalizarlo?

4. Los costos sociales de la guerra en Colombia

El Worldwatch Institute informó que los países africanos y latinoamericanos que tienen conflictos armados recibieron unos 300.000 fusiles Kalashnikov, descartados por Alemania Oriental; que cuando Estados Unidos salió de Vietnam en 1975, dejó tras de sí 1,8 millones de armas pequeñas y cerca de 150.000 toneladas de municiones, y que gran parte de esas armas ha ido a parar a los sitios de conflicto regional.

El gasto militar de Sur América ha crecido en 23.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Por países este incremento fue de la siguiente manera: Brasil, 3.500 millones; Colombia, 665 millones; Chile, 366 millones y Perú, 121 millones. Solo Argentina y Venezuela mostraron una reducción significativa en el gasto militar: 328 y 158 millones, respectivamente (27).

La actual guerra que libra Colombia cuesta el 2.7% del PIB. El país sí ha hecho esfuerzos para erradicar la producción de drogas alucinógenas; así por ejemplo, en 1999 fueron

decomisados 236 toneladas de hoja de coca, 19 de cocaína, 8 de base de cocaína, 4 de marihuana. Se destruyeron 203 laboratorios, 20 pistas, 21.238 hectáreas de coca, 75 has. de amapola, 4 has. de marihuana y 0.014 has. de heroína. Cada día en promedio hay una masacre y 71 asesinados; en 1999 fueron asesinadas 24.081 personas, es decir, 58 por cada 100 mil habitantes; también se ejecutaron 402 masacres y se secuestraron a 2.663 personas. En las masacres se han asesinado más de 1.863 personas en un solo año. Cada año se registran 150 desaparecidos. Las fuerzas militares han pagado 119.321 millones de pesos por indemnizaciones a víctimas de la violencia, por fallas en el ejercicio de sus funciones.

Los helicópteros vuelan 50 horas al mes en promedio y cada hora de vuelo cuesta 3 millones de pesos en combustible. El aparato militar se gasta 33 mil millones de pesos al año en energía, 17 mil millones en acueducto y 15 mil millones en servicio telefónico.

Por cada hora que pasa, en Colombia se gastan 300 millones de pesos en el mantenimiento del aparato militar.

Un bombardero cuesta el salario de 250.000 maestros o la construcción y dotación de 75 hospitales con capacidad para 100 camas cada uno. Un submarino equivale a construir y dotar escuelas para 16 millones de niños o 400 viviendas para dos millones de personas. Un tanque de guerra equivale a mil aulas para 30 mil niños. Mientras hay un soldado por cada 250 habitantes hay un médico por cada 1.500, 5.000 y hasta 10.000 habitantes. Mientras se invierte 500 millones de dólares en educación se gastan 2 mil quinientos en armamento. No obstante estos esfuerzos, la producción de cocaína se ha multiplicado por 8 veces después de la muerte de Pablo Escobar.

4.1 Mientras tanto el pueblo sufre

Paradójicamente, mientras se gasta infinidad de recursos en la guerra, el pueblo sufre no solo el impacto de la misma, sino también el recorte de recursos para invertir en la satisfacción de sus necesidades. Algunos indicadores publicados por la CEPAL así lo evidencian; por ejemplo, el PIB por habitante de Colombia es de US\$ 2.100 (en 1995) casi igual al de Chile que tiene la mitad de la población colombiana; en cambio para Argentina que tiene la misma cantidad de habitantes que nuestro país este indicador es de US\$6.081; para Bahamas y Barbados es de US\$ 11.113 y US\$ 6.456 respectivamente. En Nariño el ingreso per cápita equivale apenas al 44.5% del promedio nacional. Es decir, mientras un colombiano recibe 100 pesos, a un nariñense le corresponden solo \$44,50.

Para el DNP, la distribución del ingreso nacional en Colombia presenta una diferencia de 120 veces, pues mientras el 50% de la población percibe tan solo el 13.8% del mismo, el 20% de ésta concentra el 62% y el 4%, el 20% de dicho ingreso. Esto ha modificado regresivamente la condición estratificada de la población; así, en la actualidad el 72% de los colombianos se ubica en los estratos 1,2 y 3, mientras hace 10 años era el 65%; en los estratos 3 y 4 se concentra el 12%, contra el 33% (diez años atrás) y en los estratos 5 y 6, el 10%. Es decir, existe una evidente depauperación relativa y absoluta de los colombianos.

En cuanto a educación, en Colombia de cada 1.000 niños en capacidad de estudiar, 770 ingresan a primero de primaria, de los cuales solo 216 terminan quinto año; de estos apenas 119 ingresan a primero de bachillerato y solo 37 terminan la secundaria, 25 ingresan a la

Universidad (12 en universidades públicas y 13 en privadas), 11 la terminan y tan solo 7 se gradúan. Queda por resolver la pregunta final: ¿cuantos profesionales encontrarán empleo?

Así como muchos de los recursos del Plan Colombia podrían invertirse en resolver los anteriores y/u otros problemas del orden nacional, también podrían destinarse a departamentos como Nariño, que tiene tan cerca la guerra declarada en el Putumayo, empezando por ejemplo, por satisfacer las Necesidades Básicas Insatisfechas que llegan al 38%, cuando nacionalmente es del 25%; o bajando la Línea de Pobreza que está en un 72% cuando el índice nacional es del 54%; o la Línea de Indigencia que está en el 47% cuando el promedio nacional es del 26,5%.

5. Es urgente establecer un nuevo pacto internacional para el desarrollo humano sostenible social, económico y pacífico que erradique las causas objetivas del narcotráfico.

El problema del narcotráfico hay que insertarlo en el debate de fondo, de las disparidades en el desarrollo socioeconómico de los países y de las regiones dentro de cada país; es decir, que para resolverlo hay que apuntar a las causas objetivas del ordenamiento internacional. Se propone concertar un nuevo pacto internacional que coloque a las personas en el centro de las políticas nacionales y de la cooperación internacional para el desarrollo. Se trata de un pacto realista, que defina objetivos, recursos, estrategias y un marco institucional, para dar y recibir. Como propuestas específicas se formulan las siguientes:

Este pacto debe pasar por una redistribución internacional del ingreso a través del Sistema de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), fortalecido económicamente con un impuesto progresivo a la renta de los países ricos, que permita superar el escaso 0.3% del PNB que estos aportan actualmente, mientras internamente “reciclan” cerca del 25% de su PNB. Esa redistribución no debe obedecer a razones políticas.

Los países industrializados deben responder por el control del consumo de narcóticos; de la venta de precursores químicos y de armas.

Impulsar la responsabilidad compartida en el desarrollo sostenible, ambiental, financiera y socialmente. “El que contamina paga”.

Reducir el gasto militar, y aumentar el orientado al bienestar social, en por lo menos un 3% anual, lo que representaría, a precios de 1990, un ahorro de U\$1.2 billones en los países industrializados y U\$ 279.000 millones en los países en desarrollo.

Creación de *un sistema de tributación internacional*, que se podría conformar con un impuesto al consumo, de un dólar por barril de petróleo, cobrado en la fuente. Un impuesto equivalente sobre el carbón y un impuesto de solidaridad que podría ser del 1% a las importaciones (28).

Renegociación internacional y solidaria de la deuda, que está sustrayendo cerca de U\$50.000 millones anuales en favor de los países desarrollados.

Liberar los mercados internacionales para bienes y servicios de los países sub-desarrollados, eliminando las restricciones a sus exportaciones.

Por su parte los países en desarrollo deberán mejorar sus políticas de desarrollo y respeto humano, de democracia, de la planeación para el desarrollo. Y ser transparentes en su administración pública.

Se debe reformar, en función del desarrollo humano, a las Naciones Unidas y al Banco Mundial, para que sea un intermediario comprensivo entre los países en desarrollo y los mercados internacionales. El FMI deberá constituirse en un banco central mundial, que administre la liquidez internacional, etc. La idea es que estos organismos internacionales sirvan de complemento y no de sustituto de la acción nacional.

El Plan Colombia debe ser un verdadero programa de solución de los factores que generan violencia tales como la pobreza, la violación de los derechos humanos, la ingobernabilidad, la exclusión, etc. Por lo tanto las partidas debe redistribuirse en función de la política económica y social.

Debe estructurarse una veeduría binacional, no gubernamental, de los Estados Unidos y Colombia, para hacer un seguimiento a la ejecución de los recursos del Plan Colombia, con objetivos sociales y no de guerra.

Si el narcotráfico se ha constituido en elemento consubstancial de la economía capitalista, entonces su erradicación definitiva estará en la construcción de un modelo de economía diferente, en donde no quepan las sustancias psicoactivas como valores de uso que coadyuvan el desarrollo desordenado de la personalidad y contribuyen a la concentración de la riqueza. En Cuba, no sólo no hay narcotráfico sino que allá rehabilitan a muchos drogadictos del mundo capitalista.

NOTAS

/* Economista, Mg. Profesor Asociado Programa de Economía Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad de Nariño.

(1) PLAN COLOMBIA. Magazin Dominical. El Espectador. Bogotá. Enero 2 de 2.000. P. 1.

(2) PORTAFOLIO. Bogotá. 23 de diciembre 1999. P. 1, 2.

(3) PLAN COLOMBIA. Op. Cit. P. 1.

(4) SEMANA. Bogotá. 20 de septiembre de 1999. P. 31.

(5) PORTAFOLIO. Op. Cit. P. 1-23.

- (6) EL TIEMPO. "FMI: El ajuste puede ser doloroso". Bogotá. Julio 18 de 1999. P. 8 D.
- (7) EL TIEMPO. Bogotá. Junio 14 de 1998. P. 23.
- (8) EL TIEMPO. Bogotá. Agosto 19 de 1999. P. 7.
- (9) EL TIEMPO. Bogotá. Marzo 10 de 2000. P. 6.
- (10) PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. Hechos de paz. Bogotá 1999. P. 443.
- (11) *Ibíd.*, P. 7.
- (12) *Ibíd.*, P. 9.
- (13) *Ibíd.*, P. 10.
- (14) EL TIEMPO. Una nueva arista en el debate a la ayuda en el Congreso estadounidense. P. 6.
- (15) *Ibíd.*
- (16) *Ibíd.*
- (17) EL ESPECTADOR. Estados Unidos prepara su propia trampa. Marzo 9 de 2.000. P. 1.
- (18) *Ibíd.*
- (19) *Ibíd.*
- (20) EL TIEMPO. Plan Cambalache. marzo 10 de 2000.P. 5^a.
- (21) *Ibíd.*
- (22) *Ibíd.*
- (23) *Ibíd.*
- (24) VISION. Armas calientes de la guerra fría. Septiembre 1-15 de 1998.
- (25) UNESCO Siglo XXI. París 1991. P. 23. Santafé de Bogotá 1994.